



Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Distr.
GENERAL

HRI/CORE/1/Add.40
22 de julio de 1994

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

DOCUMENTO BASICO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LOS INFORMES
DE LOS ESTADOS MIEMBROS

REPUBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. DATOS DEMOGRAFICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES BASICOS	1 - 22	3
II. ESTRUCTURA POLITICA GENERAL	23 - 70	7
A. Historia y marco político	23 - 38	7
B. Tipo de gobierno	39	10
C. Autoridad legislativa	40 - 48	10
D. El Jefe del Estado	49 - 52	13
E. El poder ejecutivo	53 - 57	15
F. El poder judicial	58 - 63	17
G. Los tribunales constitucionales	64 - 65	19
H. Las provincias autónomas	66 - 67	20
I. Autogobierno local	68 - 70	20

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
III. MARCO JURIDICO GENERAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	71 - 143	21
A. Organos judiciales, administrativos y de otra índole competentes en materia de derechos humanos	71 - 114	21
B. Recursos de que disponen las personas que afirman que se han violado sus derechos y medios de indemnización y rehabilitación para las víctimas	115 - 132	32
C. ¿Están protegidos por la Constitución o por una carta especial de derechos los derechos estipulados por los distintos instrumentos de derechos humanos y, en tal caso, qué disposiciones de la Constitución o de la carta de derechos se aplican a su violación y en qué términos?	133 - 136	35
D. ¿Cómo se han incorporado los instrumentos de derechos humanos al ordenamiento jurídico interno?	137 - 138	36
E. ¿Los tribunales u organismos administrativos pueden invocar las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos o aplicarlas directamente en la práctica o deben transformarse primero en leyes internas o reglamentos administrativos antes de que puedan aplicarlas los organismos competentes?	139 - 140	37
F. ¿Existe alguna institución u órgano nacional encargado de vigilar la aplicación de los derechos humanos?	141 - 143	37
IV. INFORMACION Y PUBLICIDAD	144 - 145	38

I. DATOS DEMOGRAFICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES BASICOS

1. La República Federativa de Yugoslavia está integrada por las repúblicas de Serbia y Montenegro. Se halla situada en el sudoeste del continente europeo, en la parte central de la península de los Balcanes, siendo su superficie de 102.173 km². Geográficamente, la República Federativa de Yugoslavia es un país balcánico, centroeuropeo, mediterráneo y transdanubiano. Limita con ocho Estados: Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, Italia y las repúblicas de la antigua Yugoslavia de Bosnia y Herzegovina, Croacia y Macedonia.

2. Según el censo de 1991, la República Federativa de Yugoslavia tiene una población de 10.394.026 habitantes 1/. De este total, 9.778.991 viven en la República de Serbia y 615.035 en la República de Montenegro. La densidad media de población es de 101,18 habitantes por km².

Desglose de la población por nacionalidades

TOTAL	10 394 026
Serbios	6 504 048
Montenegrinos	519 766
Yugoslavos	349 784
Albaneses	1 714 768
Húngaros	344 147
Musulmanes	336 025
Croatas	111 650
Gitanos	143 519
Eslovacos	66 863
Rumanos	42 364
Macedonios	47 118
Búlgaros	26 922
Otros <u>2/</u>	213 974

3. Del total de habitantes, 5.194.261 son hombres y 5.199.765 mujeres. La población más joven, esto es las personas de menos de 14 años de edad representan el 25% del total y las comprendidas en el grupo de más de 65 años el 9,9%. En 1990 se registraron en Yugoslavia 155.022 nacidos vivos o el 14,7 por mil de la población. Del total de nacidos vivos, 80.541 fueron varones y 74.481 hembras. El índice de natalidad es del 2,1%. Se produjeron un total de 97.665 fallecimientos, lo que equivale al 9,3 por mil de la población. De esta cifra, 52.419 eran varones y 45.246 hembras. La mortalidad infantil se mantuvo en 3.537 personas, con una proporción más importante de varones (1.921), frente a 1.616 niñas. Se produjeron 955 alumbramientos de mortinatos: 528 varones y 427 hembras. El incremento natural en 1990 fue de 57.357 personas, esto es de un 5,4 por mil, de las cuales 28.122 eran varones y 29.235 hembras. La edad promedio de la población es de 35 años, siendo de 33,9 años para los hombres y de 36 para las mujeres. La esperanza de vida de los nacidos vivos en 1990 era de 71,7 años, siendo de 69,1 para los hombres y de 74,3 para las mujeres.

4. La moneda nacional es el dinar yugoslavo.

5. La situación económica de Yugoslavia es sumamente grave: descienden el producto social bruto y la producción, así como el volumen del comercio exterior. Las principales causas de esta situación son las sanciones aplicadas por las Naciones Unidas contra la República Federativa de Yugoslavia, la interrupción de los lazos con las repúblicas de la antigua Yugoslavia, etc. Esta y otras razones han ocasionado una caída radical de los niveles de vida, hiperinflación y condiciones globales negativas en la esfera de los servicios sociales y de la seguridad social.

6. La República Federativa de Yugoslavia cuenta con 3.947 km de líneas férreas, 1.339 de las cuales están electrificadas. Hay 47.460 km de carreteras, incluidos 6.400 km de carreteras nacionales, 1.250 km de carreteras regionales y vías locales que representan en conjunto 28.540 km. En el sector del transporte, Yugoslavia cuenta con 37 aeronaves, 1 buque de pasajeros y 37 buques de carga para el servicio marítimo y, con 8 buques de pasajeros y 590 de carga que aseguran el tráfico fluvial interno. A fines de 1990 estaban registrados 1.405.455 vehículos automóviles, 13.133 autobuses y 92.874 camiones.

7. La población rural predomina en la República Federativa de Yugoslavia sobre la urbana, representando el 78,5% frente al 4,4% respectivamente; el 17,1% restante corresponde a aglomeraciones de tipo mixto.

8. El número de hogares es de 2.711.453. Predominan los de cuatro personas, que ascienden a 613.722, en tanto que existen 358.968 hogares unipersonales.

9. De la cifra total de población correspondiente a 1981 (9.897.986) la población laboralmente activa representa algo menos de la mitad, esto es, 4.428.228 personas (44,7%). La proporción de la población masculina activa (2.747.421) duplica a la femenina, que es de 1.680.807. Los agricultores representan más de la mitad de la población activa o el 58,3%.

10. El número de personas que tienen un ingreso fijo (incluidos los jubilados, los propietarios de bienes raíces, los beneficiarios de prestaciones asistenciales, etc.) asciende a 754.144, con un número ligeramente superior de hombres (397.283) que de mujeres (359.861). Del total de personas a cargo (4.671.273), esto es, cerca de la mitad de la población, las mujeres representan la proporción más elevada con 2.918.562 unidades. El número de varones a cargo asciende a 1.752.211.

11. El sector público de la República Federal de Yugoslavia empleó en 1990 a un total de 2.707.000 individuos, de ellos 1.045.000 mujeres. En el sector privado estaban empleadas 66.000 personas, incluidas 26.000 mujeres. Las cifras preliminares del censo de 1991 muestran que se han triplicado los empleos en el sector privado, reflejando así la tendencia a la privatización del capital de propiedad social y el desarrollo de una economía de mercado.

12. La tasa de desempleo es del 20,5%. Según los indicadores preliminares para 1991, 714.224 personas, de ellas 374.176 mujeres, buscaban empleo en la República Federal de Yugoslavia. De este total, la mayoría eran diplomados universitarios, graduados de escuelas postsecundarias y graduados de escuelas secundarias de formación profesional (283.700), de ellos 165.600 mujeres). Es también importante el número de trabajadores no cualificados que buscan empleo: 241.900, de ellos 125.700 mujeres, esto es, aproximadamente la mitad.

13. Yugoslavia cuenta con 21.235 médicos en activo, siendo la relación médico-pacientes de 1 por 500. Hay 4.702 dentistas y 2.698 farmacéuticos. El número de camas de hospital se eleva a 60.808, o sea, una cama por cada 172 habitantes.

14. A finales de 1990, el censo de viviendas estaba integrado por 3.207.000 unidades. En la actualidad se está privatizando este sector mediante adquisiciones por los arrendatarios. La superficie promedio de las viviendas por inquilino es de 19 m²; el 96,9% de ellas dispone de electricidad, el 69,4% de agua corriente y el 53,6% de instalaciones sanitarias.

15. Según el censo de 1981, de los 8.258.032 habitantes de más de 10 años de edad, 7.368.029 sabían leer y escribir, es decir, 3.885.984 hombres y 3.482.045 mujeres, respectivamente. En este grupo de población, el 10,8% eran analfabetos, representando las mujeres el cuádruple de los hombres, esto es, el 16,78 y el 4,61%, respectivamente.

16. Según los datos preliminares del censo de 1991, en el territorio de la República Federativa de Yugoslavia se cuenta con 5.075 escuelas de enseñanza primaria, 565 escuelas secundarias, 63 escuelas postsecundarias y 84 instituciones de enseñanza superior. A lo largo de 1990, terminaron la enseñanza primaria obligatoria 143.345 alumnos; 93.408 terminaron la enseñanza secundaria, 7.930 estudiantes recibieron el certificado de escolaridad postsecundaria y 11.320 recibieron diplomas universitarios. Se licenciaron 1.018 candidatos, doctorándose 483.

17. Según la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia, el idioma oficial del país es el serbio, que engloba los dialectos ekavian e iekavian. Son de uso oficial el alfabeto cirílico y el latino, de conformidad con la Constitución y la legislación. Son también oficiales los idiomas y alfabetos de las minorías nacionales en los territorios de la República Federativa de Yugoslavia habitados por esas minorías.

18. En 1981, la mayoría de la población (7.639.886) empleaba el serbio como lengua materna. El albanés es el idioma más extendido entre las lenguas minoritarias nacionales (hablado por 1.351.894 individuos), seguido por el húngaro (374.864).

Desglose estadístico de la población por idioma materno (1981)

Serbio	7 639 886	Ruteno	16 231
Macedonio	30 063	Eslovaco	67 621
Esloveno	8 759	Turco	16 393
Albanés	1 351 894	Ucranio	2 023
Búlgaro	35 299	Valaco	129 614
Checo	1 970	Danés	899
Griego	939	Inglés	750
Italiano	436	Holandés	123
Hebreo	40	Noruego	273
Húngaro	374 864	Sueco	416
Alemán	3 883	Ruso	1 911
Polaco	858	Otros idiomas	2 485
Romaní	93 125	Desconocido	59 163
Rumano	56 499		

19. La República Federativa de Yugoslavia contaba en 1991 con 64 emisoras de radio (8 en la República de Montenegro y 56 en la República de Serbia) con un total de 1.877.000 abonados. La red de televisión comprende 6 centros, uno de ellos en la República de Montenegro y 5 en la República de Serbia, elevándose el total de abonados a 1.699.000.

20. En Yugoslavia se publican un total de 801 periódicos y revistas, incluidos 11 diarios, 105 semanarios, 149 publicaciones quincenales y 269 publicaciones mensuales, en tanto que las demás revistas se publican con otra periodicidad u ocasionalmente. La mayoría de estas publicaciones se hacen en serbio (692 de 801), 18 revistas y periódicos se publican en albanés, 25 en húngaro, 2 en búlgaro, 6 en checo y eslovaco, 5 en rumano, 6 en ruteno y 3 en turco. Cuatro periódicos o revistas se publican en inglés y 22 se editan en varios idiomas. Del total de revistas (505) 410 se publican en serbio. En cuanto a los idiomas nacionales minoritarios, el que cuenta con un mayor número de revistas publicadas es el albanés (14) seguido por el húngaro, el checo y el eslovaco (6 publicaciones en cada idioma). Se publican 26 revistas en inglés, en tanto que las publicaciones con ediciones en varios idiomas alcanza la cifra de 25.

21. En 1991, el número de adultos convictos en la República Federativa de Yugoslavia fue de 35.756. La mayoría fueron condenados por infracciones en materia de circulación (8.307), o delitos contra la vida y la integridad física (5.911), en tanto que 800 personas fueron halladas culpables de delitos penales contra las libertades y derechos humanos y civiles y 29 otras de delitos contra el orden público y la seguridad nacional. En el mismo período, fueron declarados culpables 2.563 adolescentes, 1.999 de ellos como consecuencia de delitos contra la propiedad. Se dispuso el ingreso en

reformatorios de 1.066 adolescentes menos de 16 años, y de 1.490 adolescentes de mayor edad. Siete adolescentes mayores de 16 años fueron condenados a penas que debían cumplir en campos correccionales.

22. Las multas fueron las sanciones más comunes, imponiéndose en 14.053 casos, frente a 12.580 penas de prisión. Del total de convictos (35.756) se impuso a un gran número una pena suspendida (14.053). La Constitución estipula (párrafo 2 del artículo 21), que los delitos penales previstos en la legislación federal no deben entrañar la pena capital. Esto significa que, según la legislación penal yugoslava positiva, sólo puede condenarse a la pena de muerte por los más graves delitos previstos en los códigos penales de las repúblicas miembros, en especial en los casos más graves de homicidio y robo a mano armada con premeditación.

II. ESTRUCTURA POLITICA GENERAL

A. Historia y marco político

23. La migración de los eslavos del sur a la península de los Balcanes concluyó a principios del siglo VII, en el que se inició un proceso de formación de Estados comparable al que se produjo en la Europa occidental. Las entidades más notables creadas por los eslavos del sur hasta el siglo XIV incluyen el Estado de Croacia en los siglos X y XI; la Macedonia del Zar Samuil (976-1014); Bosnia hacia finales del siglo XIV y el Estado serbio de la dinastía Nemanjic, entre principios del siglo XIII y mediados del XIV que, bajo el reinado del Zar Dushan se extendió a cerca de las dos terceras partes del conjunto de la península balcánica.

24. Las conquistas turcas y austrohúngaras interrumpieron este proceso, que no renació hasta después de los dos alzamientos serbios de 1804 y 1815 y la formación del Principado de Serbia. Los Principados de Serbia y Montenegro lograron su independencia en el Congreso de Berlín de 1875, que autorizó la anexión por el Imperio Austrohúngaro de Bosnia-Herzegovina.

25. La idea de la unificación de los eslavos del sur, promovida en el siglo XIX por la Serbia liberada, empezó a arraigar. El objetivo perseguido consistía en la liberación de todos los eslavos del sur del dominio extranjero y en la fundación de un Estado común. Las condiciones necesarias para que esta idea se materializase no se dieron hasta el final de la primera guerra mundial, durante la cual Serbia y Montenegro sufrieron enormes pérdidas luchando con valentía al lado de los aliados.

26. Yugoslavia se hizo realidad el 1º de diciembre de 1918 como consecuencia de la unificación de Serbia (tras su unificación con el Reino de Montenegro) con los pueblos eslavos del sur -los eslovenos, los croatas y los serbios- que hasta ese momento habían vivido en lo que fue el antiguo Imperio Austrohúngaro. La unificación se completó bajo la dinastía serbia Karadjordjevic y el primer nombre dado a ese Estado común fue el de Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Desde el punto de vista internacional, el nuevo Estado era una prolongación del Reino de Serbia,

del que había heredado su personalidad y sus compromisos internacionales, así como las obligaciones del Reino de Montenegro.

27. A comienzos de 1929 se cambió el nombre del Estado por el de Reino de Yugoslavia. Con independencia de las inestables condiciones económicas y del caos político que siguieron al asesinato del Rey Aleksandar en Marsella, en 1934, los cimientos del Estado fueron gravemente sacudidos por el separatismo croata, que provocó la formación de una entidad administrativa separada -la Banovina Hrvatska en 1939, en vísperas de la segunda guerra mundial.

28. Tras el ataque de las unidades fascistas alemanas, italianas, húngaras y búlgaras en abril de 1941 al que se opuso una breve resistencia, el ejército del Reino de Yugoslavia capituló y el Gobierno abandonó el país. Los ocupantes desmembraron el país formando con partes de Croacia, Eslavonia, Bosnia-Herzegovina y Dalmacia lo que se conoció como Estado Independiente de Croacia.

29. A mediados de 1941, los pueblos yugoslavos se alzaron en armas para liberar el país. Hacia el final de la guerra, en 1944, se constituyó con el apoyo de los aliados un gobierno provisional mixto formado por representantes del movimiento comunista y del Gobierno Real en el exilio. En noviembre de 1945 se celebraron elecciones para el establecimiento de una Asamblea Constitucional, que el 29 de noviembre de 1945 proclamó el Estado de la República Federativa Popular de Yugoslavia. En esas elecciones y en otras ulteriores fueron eliminados los restos de los partidos burgueses, reemplazándose el sistema multipartido por el dominio del Partido Comunista. El Estado de la República Federativa Popular de Yugoslavia asumió la personalidad jurídica internacional del Reino de Yugoslavia.

30. El nuevo Estado se constituyó como una federación de seis repúblicas, cuyo orden y fronteras internas fueron determinadas durante la guerra por los órganos del partido comunista. Se establecieron las siguientes unidades federales (repúblicas): Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Croacia, Eslovenia y Serbia (de la que formaban parte integrante la Provincia Autónoma de Voivodina y la Región Autónoma de Kosovo). El trazado de los límites administrativos entre las unidades federales se basó principalmente en los límites de las regiones administrativas establecidos antes de la guerra, pero sin que se confirmaran éstos mediante un instrumento jurídico. Una de las unidades federales (Bosnia-Herzegovina) se formó como comunidad equitativa de los pueblos (serbios y croatas) y nacionalidades constituyentes, más bien que basándose en principios étnicos, en tanto que Croacia se constituyó como una comunidad de dos pueblos constituyentes, los croatas y los serbios. Los musulmanes lograron en Yugoslavia la categoría de nación después de 1968. Como en el caso de las otras cuatro repúblicas -Serbia, Montenegro, Eslovenia y Macedonia- tampoco se tomó en consideración el principio étnico al determinar las fronteras entre Croacia y Bosnia-Herzegovina, por lo cual cada una de las unidades federales siguió estando poblada por personas pertenecientes a uno o más de los diversos pueblos yugoslavos, sin hablar de las numerosas minorías étnicas. Estos hechos, a los que las autoridades comunistas no concedieron la debida atención en el momento de constituirse

la Federación Yugoslava, plantearon problemas prácticamente insuperables cuando hubo que proceder a la delimitación de las diversas repúblicas que formaban la antigua Yugoslavia.

31. Durante sus cuatro décadas y media de existencia, la Yugoslavia socialista pasó por un breve período de socialismo administrativo y por un período más dilatado de una forma concreta de autogestión socialista. En las relaciones económicas y sociales globales, se lograron resultados muy superiores a los registrados en los países socialistas de Europa oriental; lo mismo puede decirse de la amplitud de la democratización y de la situación de los derechos humanos y de las libertades. Por supuesto, tras los bastidores de lo que parecía ser una sociedad ideal persistían múltiples problemas reales entre los que cabe destacar en particular el de las relaciones entre nacionalidades nunca resuelto, condiciones económicas poco satisfactorias y algunos otros factores desestabilizadores.

32. Tras la muerte en 1980 del Presidente Tito, el régimen comunista no consiguió solucionar los problemas acumulados y poner en marcha un proceso eficaz de reformas socioeconómicas. La Liga comunista se deshizo en enero de 1990, acelerándose la crisis del Estado. Fueron vanas las tentativas de los dirigentes federales y de las repúblicas para transformar la Federación Yugoslava y hallar una solución pacífica a la crisis.

33. Eslovenia y Croacia proclamaron su independencia en junio de 1991 invocando su derecho a la secesión y alentados abiertamente por ciertos países extranjeros. En diciembre de 1990, Croacia adoptó su Constitución, en virtud de la cual y por primera vez desde 1945 los serbios perdieron su condición de ser uno de los dos pueblos constituyentes en esa república. El ejército yugoslavo intervino en Eslovenia en una medida limitada, en tanto que su intervención en Croacia tuvo por objeto proteger a la población serbia de esa república. La comunidad internacional reconoció prematuramente a Eslovenia y Croacia y el ejemplo de las repúblicas secesionistas fue pronto seguido por Macedonia y Bosnia-Herzegovina, cuyos dirigentes declararon también la independencia.

34. Tomando como base la ininterrumpida personalidad de Yugoslavia y la asociación voluntaria de la República de Serbia y de la República de Montenegro, y habida cuenta de las mociones y del acuerdo a que llegaron los parlamentos de esas dos repúblicas, la Cámara Federal de la Asamblea adoptó la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia el 27 de abril de 1992. La República Federativa de Yugoslavia se constituyó así como Estado Federal soberano, integrado en un pie de igualdad por la República de Serbia y la República de Montenegro.

35. En mayo de 1992 se celebraron elecciones pluripartitas para designar a los diputados en la Asamblea Federal bicameral. En junio se procedió a la elección del primer Presidente de la República Federativa de Yugoslavia, eligiéndose en julio al Primer Ministro. El 20 de diciembre de 1992 tuvieron lugar en los niveles federal, de las repúblicas y local nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales anticipadas.

36. Las repúblicas miembros se definen constitucionalmente como Estados soberanos que pueden ocuparse de todas las cuestiones que, según la Constitución Federal, sean de la competencia de la República Federativa de Yugoslavia. Son autónomas en lo que concierne a la determinación de su organización interna y, dentro de sus competencias, pueden mantener relaciones internacionales, establecer sus propias oficinas representativas en Estados extranjeros y concertar acuerdos internacionales, siempre que éstos no redunden en detrimento de la República Federativa de Yugoslavia o de la otra república miembro (la República de Serbia adoptó su Constitución el 9 de septiembre de 1990, en tanto que la República de Montenegro lo hizo el 12 de octubre de 1992).

37. Según la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia, el pluralismo político es condición previa y garantía de todo sistema político democrático (art. 14). En julio de 1990 se promulgaron leyes federales y de las repúblicas para la instauración de un sistema de partidos múltiples. En agosto de 1993, figuraban en el registro de partidos políticos 47 de ámbito federal, 104 cuyas actividades se limitaban a la República de Serbia y 33 limitados a la República de Montenegro.

38. El sistema económico de la República Federativa de Yugoslavia se basa en la libertad de la mano de obra y del comercio y garantiza la propiedad privada o de otro tipo. La transformación de la propiedad (que de social ha pasado a revestir otras formas) se ha iniciado de conformidad con las normas promulgadas en 1988. En consecuencia, los recursos naturales son propiedad del Estado, en tanto que las tierras agrícolas pueden ser de propiedad privada o de otro tipo. Los ciudadanos extranjeros pueden adquirir derechos de propiedad y llevar a cabo operaciones comerciales en condiciones de reciprocidad, de conformidad con las leyes federales.

B. Tipo de gobierno

39. El sistema de gobierno de la República Federativa de Yugoslavia está organizado conforme al principio de la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Es una forma parlamentaria de gobierno. El pueblo es soberano y participa en el gobierno directamente y a través de representantes libremente elegidos. Las relaciones entre las autoridades federales del Estado y las repúblicas miembros se basan en la división de las potestades entre los órganos federales y los de las repúblicas, habiéndose determinado las competencias en las esferas legislativa, ejecutiva y judicial mediante una división vertical. La organización de la autoridad gubernamental se ha llevado a cabo de conformidad con los mismos principios en las repúblicas miembros, si bien existen algunas diferencias, especialmente en la esfera ejecutiva.

C. Autoridad legislativa

40. La Asamblea Federal encarna la autoridad legislativa del Estado Federal. Se compone de dos cámaras: la Cámara de los Ciudadanos (Cámara de Representantes) y la Cámara de las Repúblicas (Cámara Federal). La composición de las Cámaras de la Asamblea se determina teniendo en cuenta

que la República Federativa de Yugoslavia es una federación bicameral entre cuyos miembros existen considerables diferencias en cuanto a superficie, población, etc. Cada diputado en la Cámara de los Ciudadanos es elegido por 65.000 votantes, eligiéndose como mínimo 30 diputados de cada república miembro. En las elecciones celebradas el 20 de diciembre de 1992 fueron elegidos 108 diputados por la República de Serbia y 30 diputados en la República de Montenegro para integrar esta Cámara, que se compone en la actualidad de 138 diputados. La Cámara de las Repúblicas, la otra Cámara de la Asamblea está integrada por 20 diputados de cada una de las repúblicas miembros, elegidos entre los componentes de los parlamentos respectivos.

41. Según la Ley electoral de 1992, la elección de los diputados a la Cámara de los Ciudadanos de la Asamblea Federal y a los parlamentos de las repúblicas miembros se basa en el sistema electoral proporcional y se celebra cada cuatro años. Las elecciones se llevan a cabo por votación secreta, sobre la base de la participación libre, general igualitaria y directa de los ciudadanos. Todo ciudadano yugoslavo de más de 18 años de edad, apto para trabajar y residente en el territorio de la circunscripción en la que haga uso de sus derechos electorales puede elegir diputados. Las condiciones por las que se rige el derecho de voto se aplican también a la presentación de candidaturas, sin que exista un vínculo obligado entre el lugar de residencia y la circunscripción electoral. Todos los partidos políticos inscritos (individualmente o en coalición con otros) y grupos de ciudadanos tienen derecho a presentar candidatos a diputados. El Estado participa (parcial y proporcionalmente) en la financiación de la campaña electoral. Los proponentes de listas de candidatos conciertan acuerdos con las organizaciones de prensa, radio y televisión y con sus dirigentes en relación con la presentación de candidatos y programas electorales. Para la atribución de los escaños se emplea la fórmula de Aughton, según la cual no se tienen en cuenta las listas que consiguen menos de un determinado porcentaje de votos (4-5%). Las elecciones están a cargo de órganos no estatales (comisiones y consejos electorales) y son por lo general supervisadas por consejos especiales.

42. Las personas que ostentan la condición de diputados en la Cámara de las Repúblicas no pueden ser candidatos a la Cámara de los Ciudadanos de la Asamblea Federal ni al parlamento de una república; existe también incompatibilidad entre las funciones de los diputados federales y las de Presidente de la República Federativa de Yugoslavia, Primer Ministro, miembros del Gobierno Federal, magistrados del Tribunal Federal y del Tribunal Federal Constitucional y Fiscal Federal del Estado. En las Repúblicas de Serbia y Montenegro, la función de diputado parlamentario es incompatible con la de Presidente de la República o con funciones judiciales o de otro tipo confiadas a candidatos elegidos por esos parlamentos.

43. El mandato de los diputados en la Asamblea Federal así como en las asambleas de las repúblicas es de cuatro años, si bien puede finalizar antes de la expiración de ese período en los casos establecidos por la Constitución y la legislación. No se prevé la revocación de diputados. Los diputados deciden y votan según su conciencia y gozan de inmunidad. Pueden presentar proyectos de ley sobre normas federales e interpelar al Gobierno, tienen

derecho a ser informados acerca de todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de sus funciones, etc. Disfrutan de ciertos beneficios financieros en el cumplimiento de sus funciones (remuneración de su labor, transportes públicos y otros). Gozan de derechos especiales en tanto que grupo (por ejemplo, toda moción de confianza en el Gobierno Federal requiere que la pertinente iniciativa sea presentada por 20 diputados federales).

44. La Asamblea Federal adopta sus decisiones según un modo bicameral, por mayoría de votos de los diputados federales en cada una de las dos cámaras y, en dos casos (sobre cuestiones relacionadas con el Gobierno Federal y la economía), por una mayoría de dos tercios. Habiéndose aprobado el principio de la adopción bicameral de decisiones, en la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia se ha incorporado un mecanismo para la solución de conflictos entre las cámaras, cuya primera fase la constituye una comisión bicameral de armonización, siendo la segunda la aplicación provisional del texto adoptado por una de las cámaras y la tercera la disolución de la Asamblea transcurrido un año, zanjándose el conflicto entre las cámaras mediante la convocatoria de elecciones. La Asamblea Federal tiene autoridad constitucional y legislativa y decide asimismo sobre cuestiones políticas pertinentes (por ejemplo, guerra y paz o admisión de nuevas repúblicas miembros), supervisa políticamente las actuaciones del Gobierno Federal y elige al Presidente de la República Federativa de Yugoslavia, al Primer Ministro federal y a otros dignatarios.

45. Las dos cámaras de la Asamblea Federal establecen las siguientes comisiones permanentes mixtas: la Comisión de Cuestiones Constitucionales; la Comisión Legislativa-Jurídica; la Comisión para el Ejercicio de las Libertades, Derechos y Obligaciones Civiles; la Comisión Administrativa y la Comisión de Agravios y Quejas. La Cámara de los Ciudadanos y la Cámara de las Repúblicas cuentan cada una con ocho comités permanentes (Asuntos Exteriores y Relaciones Económicas Exteriores; Defensa y Seguridad; Justicia y Administración Federal; Presupuesto Federal, etc.). Las comisiones mixtas y los comités se reúnen como parte del proceso legislativo y consideran otros asuntos concretos que sean de la competencia de la Asamblea Federal. Están integrados por 7 a 11 miembros designados entre los diputados.

46. El Gobierno Federal, cada diputado federal y colectivos de 30.000 electores como mínimo, pueden presentar proyectos de ley relativos a normas federales o a toda otra reglamentación que deba ser adoptada por la Asamblea Federal. El Banco Nacional de Yugoslavia goza también de este derecho en lo que respecta a decretos por los que se regulen los sistemas monetario, de crédito y de cambio de divisas. El Gobierno Federal dictamina acerca de los proyectos de leyes federales y de otras disposiciones sometidas a la Asamblea Federal por otros proponentes autorizados.

47. La Asamblea Federal celebra dos períodos ordinarios de sesiones (el primero se inicia el primer día laborable de febrero y el segundo el primer día laborable de septiembre). Pueden también convocarse períodos extraordinarios de sesiones a petición de un tercio como mínimo de todos los diputados federales en una de las cámaras o a petición del Gobierno Federal.

48. Los parlamentos de las repúblicas son unicamerales: el mandato de sus diputados es de cuatro años y las decisiones se toman por mayoría simple y, en casos particulares, por una mayoría cualificada de votos. La Asamblea Nacional de la República de Serbia tiene 250 diputados y la Asamblea de la República de Montenegro 85. Ambas asambleas desempeñan funciones similares a las de la Asamblea Federal (gozan de poderes legislativos y constitucionales, deciden sobre cuestiones políticas concretas, supervisan desde el punto de vista político la labor del Gobierno de la República y eligen a determinados funcionarios de alto nivel). Cuentan también con comisiones y comités que participan en el proceso legislativo y estudian otras cuestiones. El derecho de presentar proyectos de ley y otros instrumentos es prerrogativa de los gobiernos de las repúblicas, de cada diputado y de un determinado número de electores (en Serbia no menos de 15.000 y en Montenegro no menos de 6.000). En Serbia, las provincias autónomas de Voivodina y Kosovo y Metohija pueden también presentar proyectos de ley. Las asambleas de las repúblicas celebran anualmente dos períodos ordinarios de sesiones y pueden convocar asimismo períodos extraordinarios de sesiones.

D. El Jefe del Estado

49. La figura de Jefe del Estado (Presidente de la República) existe tanto en el plano federal como en los de las repúblicas, si bien sus respectivos poderes difieren en cierto grado.

50. La institución del Presidente de la República (Jefe del Estado) en el ámbito federal se limita a funciones representativas y a ciertas responsabilidades relacionadas con la propuesta de candidatos para cargos federales y el mando del ejército. El Presidente representa a la República Federativa de Yugoslavia en el país y en el extranjero; promulga leyes federales por decreto; dicta instrumentos de ratificación de tratados internacionales; recomienda a la Asamblea Federal candidatos para los puestos de Primer Ministro Federal, magistrados del Tribunal Federal Constitucional y del Tribunal Federal, Fiscal Federal del Estado y Gobernador del Banco Nacional de Yugoslavia; convoca elecciones para la Asamblea Federal; nombra y destituye a embajadores de la República Federativa de Yugoslavia; recibe las credenciales de enviados diplomáticos extranjeros y pide su revocación; confiere condecoraciones y distinciones de la República Federativa de Yugoslavia y concede indultos en caso de delitos penales federales. El Presidente de la República Federativa de Yugoslavia es el jefe supremo del ejército yugoslavo tanto en la paz como en la guerra, de conformidad con la decisión del Consejo Supremo de Defensa. Este Consejo lo constituyen el Presidente de la República Federativa de Yugoslavia, quien lo preside, y los presidentes de las repúblicas miembros. El Presidente nombra además, promueve y destituye a los oficiales superiores del ejército yugoslavo, así como a los magistrados y fiscales de los tribunales militares. El Presidente de la República Federativa de Yugoslavia es elegido por la Asamblea Federal por un período de cuatro años, por votación secreta, no pudiendo ser reelegida la misma persona por un segundo mandato. El Presidente sólo puede ser destituido si la Asamblea Federal demuestra que ha violado la Constitución; el Presidente puede también dimitir. A la expiración de su

mandato o en caso de incapacidad temporal para desempeñar sus funciones, es sustituido por el Presidente de la Cámara de las Repúblicas de la Asamblea Federal.

51. El Presidente de la República de Serbia representa, en virtud de la Constitución de esa República, a la República de Serbia, personificando su unidad estatal. Goza de las facultades siguientes: recomienda a la Asamblea de la República candidatos para el cargo de Primer Ministro de la República o de magistrado del Tribunal Constitucional de Serbia; promulga leyes por decreto; concede indultos y confiere condecoraciones y distinciones; se ocupa de las relaciones internacionales de la República de Serbia; manda las fuerzas armadas en la paz y en la guerra; ordena movilizaciones generales o parciales y organiza la preparación de la defensa; comprueba la existencia de una amenaza inmediata de guerra y proclama el estado de guerra en caso de que la Asamblea de la República no pueda reunirse; decide por decreto sobre cuestiones que sean de la competencia de la Asamblea de la República en caso de un estado de guerra o de una amenaza inmediata de guerra, siempre que la Asamblea no esté en condiciones de reunirse, y declara el estado de emergencia cuando la seguridad de la República, las libertades y derechos humanos y civiles o el ejercicio de la autoridad estatal estén amenazados en cualquier parte del territorio de la República de Serbia. Puede pedir al Gobierno de la República que exponga la opinión de la Asamblea sobre cuestiones particulares de su competencia. A propuesta del Gobierno, el Presidente de la República puede decidir la disolución de la Asamblea de la República, en cuyo caso expira también el mandato del Gobierno. El Presidente está obligado a promulgar por decreto, en un plazo de siete días, toda ley aprobada por la Asamblea, o puede pedir que la ley en cuestión sea votada de nuevo por la Asamblea dentro de ese plazo límite. Si la Asamblea se pronuncia en favor de la ley por segunda vez, el Presidente de la República está obligado a promulgarla. La elección del Presidente se efectúa de modo directo por votación secreta. Su mandato es de cinco años y puede ser reelegido por un segundo período. Puede ser destituido de su cargo por la Asamblea de la República si ésta demuestra que ha violado la Constitución y si la mayoría de los votantes se pronuncia en favor de su revocación. Puede presentar su dimisión. En caso de dimisión, de revocación, o de incapacidad temporal para desempeñar sus funciones, el Presidente es reemplazado por el Presidente de la Asamblea de la República.

52. El Presidente de la República de Montenegro representa a la República en el país y en el extranjero; promulga leyes por decreto; convoca elecciones a la Asamblea de la República; propone a la Asamblea candidatos a los cargos de Primer Ministro del Gobierno de la República y de magistrados del Tribunal Constitucional de Montenegro; recomienda a la Asamblea la convocación de referendos; concede indultos y confiere condecoraciones y distinciones. El Presidente de Montenegro tiene, en lo que concierne a la promulgación de leyes, las mismas facultades que el Presidente de la República de Serbia; es elegido directamente por los ciudadanos mediante votación secreta por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido por un segundo mandato únicamente. El Presidente sólo puede ser destituido de su cargo por la Asamblea de la República si el Tribunal Constitucional de Montenegro demuestra que ha violado la Constitución. Puede presentar su dimisión.

En caso de dimisión, de revocación, o de incapacidad temporal para desempeñar sus funciones, el Presidente es reemplazado por el Presidente de la Asamblea de la República o por el Primer Ministro, de disolverse la Asamblea.

E. El poder ejecutivo

53. La autoridad ejecutiva en la Federación y en las repúblicas compete al Gobierno (federal y de las repúblicas). Al igual que ocurre con la institución de Jefe del Estado, existen ciertas diferencias entre los gobiernos federal y de las repúblicas en lo que respecta a su posición y autoridad.

54. La Constitución define al Gobierno Federal en tanto que proponente del poder ejecutivo federal como un órgano independiente, coherente y responsable del Estado Federal. La autonomía del Gobierno Federal se refleja en sus poderes (determinación y aplicación de la política extranjera e interna, etc.), así como en sus relaciones con la Asamblea Federal (derecho del Gobierno Federal a disolver la Asamblea Federal y a pedir un voto de confianza a la Asamblea); la coherencia de la composición del Gobierno Federal está asegurada por su modo de elección, y su responsabilidad por el derecho de la Asamblea Federal de no conceder su confianza al Gobierno mediante un voto negativo. El Gobierno Federal tiene como función determinar y aplicar la política interna y extranjera; aplicar las leyes y otras disposiciones federales; mantener relaciones entre la República Federativa de Yugoslavia y otros Estados u organizaciones internacionales; proponer leyes federales y otras disposiciones a la Asamblea Federal; dictar decretos y reglamentaciones; formular dictámenes sobre proyectos de ley y otras disposiciones federales sometidas a la Asamblea Federal por otros proponentes autorizados; crear y disolver ministerios federales y otros órganos y organizaciones federales y determinar su organización y mandatos, así como canalizar y coordinar su labor, anular o rechazar sus actuaciones y designar y sustituir a funcionarios federales; ordenar la movilización general y organizar los preparativos para la defensa; declarar un estado de peligro inmediato de guerra, o el estado de guerra o de excepción cuando la Asamblea Federal no pueda reunirse y, bajo las mismas condiciones, decidir sobre cuestiones que son de la competencia de la Asamblea Federal. El Gobierno Federal decide también sobre su organización, métodos de trabajo y proceso de adopción de decisiones y lleva a cabo otras tareas especificadas en la Constitución. El Gobierno Federal es elegido por un mandato de cuatro años y esta compuesto por el Presidente o Primer Ministro, los Vicepresidentes y los Ministros federales. Los miembros del Gobierno Federal gozan de inmunidad, al igual que los diputados federales. El Gobierno Federal queda constituido cuando el Presidente de la República Federativa de Yugoslavia nombra a un Primer Ministro propuesto, quien presenta su programa y la composición de su gabinete a la Asamblea, la cual elige a su vez al Primer Ministro del Gobierno Federal. El Primer Ministro Federal da cuenta de su labor y de la labor del Gobierno a la Asamblea Federal. La Asamblea Federal puede retirar su confianza al Gobierno por mayoría de votos de los diputados de ambas cámaras tomando como base una moción de censura presentada por un mínimo

de 20 diputados. El Primer Ministro Federal puede presentar su dimisión a la Asamblea Federal, dimisión que entraña la finalización del mandato del conjunto del gabinete.

55. El Gobierno de la República de Serbia determina y aplica la política de la República de Serbia y da cumplimiento a las leyes y a otras disposiciones de la República; adopta decretos y ordenanzas; propone leyes y otras reglamentaciones a la Asamblea de la República y dictamina sobre las propuestas de otros proponentes; determina los principios de la organización interna de la administración de la República, canaliza y coordina su labor, supervisa la actuación de la administración de la República y anula o deroga sus normas; nombra y destituye a funcionarios de la administración de la República; crea servicios especializados y de otro tipo para atender sus propias necesidades y lleva a cabo otras tareas de conformidad con la Constitución y las leyes. El Gobierno propone la disolución de la Asamblea de la República pero la decisión la toma el Presidente de esa República. El Presidente de la República de Serbia, que presenta su programa y su gabinete a la Asamblea, propone al Primer Ministro designado. El Gobierno es elegido por el voto favorable de la mayoría de los diputados. El mandato del Gobierno tiene una duración de cuatro años. Está compuesto por el Presidente o Primer Ministro, los Vicepresidentes y los Ministros. Si el Primer Ministro, los Vicepresidentes o los Ministros son elegidos entre los diputados, conservan sus mandatos de diputado. El Gobierno y cada uno de sus miembros es responsable de su actuación ante la Asamblea de la República, que puede votar una moción de censura contra el conjunto del gabinete o uno de sus miembros. El Gobierno puede plantear la cuestión de confianza en la Asamblea, en tanto que el Primer Ministro puede proponer a ésta que destituya de su cargo a miembros individuales del gabinete. El Primer Ministro y los miembros de su gabinete pueden presentar su dimisión a la Asamblea de la República, pero la dimisión o revocación del Primer Ministro entraña la dimisión del conjunto del gabinete.

56. El Gobierno de la República de Montenegro determina y pone en práctica la política interna y exterior; propone la adopción de leyes y de otras normas de la República y les da cumplimiento en la práctica; adopta decretos y ordenanzas; concierta los acuerdos internacionales que sean de la competencia de la República; determina la organización y métodos de trabajo de la administración de la República, supervisa la labor de ésta y deroga o anula sus reglamentos; dicta decretos que tienen fuerza de ley cuando se declara un estado de emergencia, de amenaza inmediata de guerra o de guerra si la Asamblea no puede reunirse; desempeña otras funciones especificadas por la Constitución y las leyes. El Gobierno es elegido por un período de cuatro años y consta del Presidente o Primer Ministro, los Vicepresidentes y los Ministros. El Primer Ministro designado es nombrado por el Presidente de la República y presenta su programa y propone su gabinete a la Asamblea. Los miembros del Gobierno no pueden compatibilizar sus funciones con las de diputado. El gabinete y cada uno de sus componentes puede presentar su dimisión, en tanto que la dimisión del Primer Ministro entraña la dimisión del conjunto del gabinete. El Primer Ministro puede proponer que la Asamblea releve de su cargo a miembros individuales del gabinete. El Gobierno puede

plantear la cuestión de confianza en la Asamblea, en tanto que ésta puede a propuesta de diez diputados como mínimo, formular una moción de censura contra el Gobierno.

57. Los asuntos de la administración del Estado que son competencia del Estado Federal son tratados por los ministros federales, en tanto que los ministros de las repúblicas se ocupan de los que son competencia de éstas. Algunas cuestiones administrativas estatales que competen a la Federación pueden confiarse a empresas y otras organizaciones; algunos asuntos de la competencia de las repúblicas pueden confiarse a empresas u órganos locales autónomos. La división de las competencias administrativas entre la Federación y las repúblicas se efectúa de manera vertical, de modo que toda norma que sea de la competencia del Estado Federal sea puesta en práctica por órganos administrativos federales (sistema llamado de doble vía).

F. El poder judicial

58. La autoridad judicial la detentan los tribunales, cuyas funciones, al igual que las de los proponentes de la autoridad ejecutiva, están delimitadas por la ley. Los tribunales son independientes en sus actuaciones sin que pueda considerarse responsables a los jueces de las opiniones expresadas al adoptar una decisión judicial. La función judicial tiene carácter permanente, salvo en el caso del Tribunal Federal, en el que los jueces son elegidos por un período de nueve años de duración. Puede ponerse fin a la función de un juez en los siguientes casos: a petición personal si el interesado cumple los requisitos para su jubilación, si es declarado culpable de un delito penal y no es ya por tanto digno de seguir desempeñando esa función, si desempeña su cometido de un modo antiprofesional e inconsciente o si pierde con carácter permanente la capacidad para desempeñar un cargo judicial.

59. Las actuaciones judiciales son públicas, si bien la ley especifica algunos casos en los que no se autoriza al público a estar presente en las audiencias. En las actuaciones de los tribunales se aplica el principio colegial, aunque la ley puede prescribir la administración de la justicia por un solo juez en casos concretos. Constituye una excepción el Tribunal Federal, que actúa siempre como colegio. En los procesos judiciales participan jueces tanto profesionales como no letrados (legos); el Tribunal Federal representa también una excepción a este respecto (sólo participan en él jueces profesionales). Es posible apelar a un tribunal superior (principio de actuaciones judiciales en dos instancias) contra las decisiones tomadas por tribunales de primera instancia. Sin embargo, en casos excepcionales especificados por la ley, puede rechazarse tal apelación cuando esté asegurada por otros medios la protección jurídica. El Estado Federal regula y establece el Tribunal Federal, en tanto que las repúblicas miembros regulan y establecen independientemente sus propios tribunales.

60. El Tribunal Federal, órgano supremo del poder judicial en el marco de los derechos y obligaciones de la Federación, es la máxima autoridad judicial dentro de la jurisdicción federal. Es sobre todo un tribunal de una sola instancia y un tribunal de primera instancia para determinados tipos de

litigios. Falla también sobre cuestiones de principio relativas a la aplicación de las leyes federales y de otra legislación federal por los tribunales de las repúblicas, a fin de garantizar la aplicación uniforme de esas leyes y normas. Decide en última instancia sobre casos especificados por la ley federal; decide sobre reparaciones jurídicas extraordinarias frente a decisiones adoptadas por tribunales de las repúblicas miembros en cuestiones relacionadas con la aplicación de leyes federales; falla litigios en materia de propiedad entre las repúblicas miembros, así como entre el Estado Federal y las repúblicas miembros; decide sobre la legalidad de actos administrativos finales de las autoridades federales (procesos administrativos); decide sobre conflictos de competencia entre los tribunales de las dos repúblicas miembros, así como entre tribunales militares y de otro tipo y desempeña cualesquiera otras funciones que sean de su competencia en cumplimiento de la Constitución federal y de la legislación. El Tribunal Federal se compone de 11 jueces elegidos por la Asamblea Federal, quienes eligen a su vez a su Presidente. Los jueces gozan de la misma inmunidad que los diputados federales, pero el Tribunal decide por sí mismo acerca de esa inmunidad.

61. Los tribunales de las repúblicas están organizados en tres niveles. En la República de Serbia existen los tribunales comunales (establecidos para el territorio de una o más comunas), los tribunales de distrito (establecidos para el territorio cubierto por uno o más tribunales comunales) y el Tribunal Supremo de Serbia, que es el tribunal de rango más elevado de la República de Serbia. Los jueces de todos los tribunales son elegidos por la Asamblea de la República, que puede destituirlos de su cargo si el Tribunal Supremo demuestra que existen motivos para ello. En la República de Montenegro existen tribunales primarios (para el territorio de una o más comunas), tribunales superiores (para el territorio de uno o más tribunales primarios) y el Tribunal Supremo de Montenegro, que es el tribunal superior de la República. Las modalidades de elección de los jueces, su destitución y otras cuestiones relacionadas con la composición, organización, establecimiento y competencia de los tribunales están reglamentados de un modo similar en ambas repúblicas.

62. Además de los tribunales que tienen competencia de carácter general a los que se refieren los párrafos 60 y 61, existen también tribunales especializados. En las repúblicas miembros pueden crearse tribunales económicos con carácter de tribunales primarios y de la República, con facultades para ocuparse de leyes económicas, incluidos los delitos económicos. En el plano federal, existen tribunales militares organizados como tribunales de primera instancia y asimismo el Tribunal Militar Supremo. Estos tribunales conocen de los casos relacionados con delitos penales perpetrados por miembros del ejército o por civiles, pero relacionados con cuestiones militares o la seguridad nacional.

63. El sistema judicial comprende las figuras del Fiscal y del Procurador General, el Colegio de Abogados, los servicios de asistencia jurídica, los órganos de la administración judicial y ciertos tipos de tribunales autónomos o no estatales (juntas de arbitraje, tribunales de conciliación, tribunales electos). Existen también las oficinas del Fiscal Federal y de los fiscales

de las repúblicas (oficinas de los fiscales comunales, de distrito y de la República). Existe por otra parte la figura del Fiscal Militar. La oficina del Procurador General representa al Estado en los procesos relativos al derecho de propiedad. Los miembros del Colegio de Abogados actúan de manera independiente y autónoma, facilitando asistencia letrada a ciudadanos y personas jurídicas; existen servicios de asistencia jurídica en las comunas. La administración judicial está a cargo de los ministerios de justicia.

G. Los tribunales constitucionales

64. Según la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia, la protección de la legalidad constitucional incumbe al Tribunal Constitucional Federal, que es el garante de la constitucionalidad y legalidad; en las repúblicas esta función incumbe a sus tribunales constitucionales. El Tribunal Constitucional Federal decide acerca de la conformidad de las Constituciones de las repúblicas con la Constitución Federal, sobre la conformidad de las leyes de las repúblicas con las leyes federales, y de la legislación federal y de la Constitución Federal con tratados internacionales ratificados; sobre la conformidad de los instrumentos generales de los partidos políticos con la Constitución y la legislación federal; sobre quejas constitucionales acerca de la violación de los derechos y libertades humanos y del ciudadano por actos o acciones individuales; sobre conflictos de competencias entre órganos federales y de las repúblicas; sobre la prohibición de las actividades de partidos políticos y sobre la violación de la ley en la elección de órganos federales. El Tribunal Constitucional Federal está compuesto por siete jueces elegidos por la Asamblea Federal por un período de nueve años, los cuales eligen a su Presidente. Los jueces gozan de la misma inmunidad que los diputados federales, estando garantizada por la Constitución y las leyes la independencia de las actuaciones del tribunal. El principal efecto legal de las decisiones del Tribunal Constitucional Federal reside en el hecho de que con su adopción queda derogada la aplicación de las disposiciones del instrumento en litigio a relaciones futuras. Los instrumentos individuales adoptados pueden excepcionalmente revisarse y eliminarse sus consecuencias por vía de restitución, indemnización de daños o de otro modo.

65. Los tribunales constitucionales de las repúblicas se pronuncian en cuanto a la conformidad de las leyes y otras normas de las repúblicas con las respectivas constituciones; sobre la conformidad de las actuaciones de los partidos políticos y sobre la prohibición de sus actividades; sobre litigios electorales que no sean de la competencia de los tribunales ordinarios, etc. El Tribunal Constitucional de Montenegro resuelve las quejas constitucionales sobre la violación de libertades y derechos humanos y del ciudadano como consecuencia de actos o acciones individuales cuando no se haya previsto otra protección judicial, en tanto que el Tribunal Constitucional de Serbia carece de esas competencias. Los tribunales constitucionales de Serbia y de Montenegro están compuestos por nueve y cinco jueces, respectivamente. Cualquier persona puede entablar un proceso ante esos tribunales, así como ante el Tribunal Constitucional Federal -los procesos son instruidos por órganos estatales y personas jurídicas- si estima que sus derechos o

intereses han sido violados por el instrumento en tela de juicio. Los tribunales constitucionales pueden también llevar a cabo actuaciones de evaluación constitucional y legal.

H. Las provincias autónomas

66. Dentro de la República de Serbia existen dos provincias autónomas (Voivodina y Kosovo y Metohija) que gozan de autonomía territorial. Fueron creadas en virtud de la Constitución de la República, teniendo en cuenta las características nacionales, históricas, culturales y de otro tipo de esas regiones. Ambas provincias existen desde la segunda guerra mundial y han formado siempre parte de la República de Serbia; sin embargo, según la última Constitución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia (1974) su rango a propósito de algunos elementos, e incluso en mayor grado en la práctica, se equiparó con el de las entidades federales. Como tal equiparación de las provincias se ejerció en detrimento de la unidad e integridad estatales de la República de Serbia, la Constitución de la nueva República redujo a esas provincias a una cierta forma de autonomía territorial que, al tiempo que garantiza un elevado grado de autonomía a esas regiones, asegura asimismo la unidad estatal de la República de Serbia.

67. La Constitución de la República de Serbia especifica los sectores en los cuales las entidades de las provincias autónomas ejercen independientemente sus derechos y obligaciones. Estas adoptan programas de desarrollo económico, científico, tecnológico, demográfico, regional y social acordes con el plan de desarrollo de la República de Serbia y definen medidas para aplicar esos programas. Toman decisiones y medidas de carácter general para regular diversas cuestiones de interés para los ciudadanos en las esferas de la cultura, la educación, el empleo oficial de las lenguas y alfabetos de las minorías nacionales, la información pública, la atención sanitaria, el bienestar social, la planificación urbana y otros asuntos. Aplican la legislación y otras disposiciones de la República cuando se les confían las atribuciones oportunas; aprueban el presupuesto y las cuentas de la provincia autónoma; crean entidades, organizaciones y servicios de la provincia autónoma y desempeñan otros cometidos especificados por la Constitución y las leyes. Las provincias autónomas cuentan con sus propios ingresos, reglamentados por las leyes de la República. Aprueban su propio estatuto como instrumento jurídico supremo de la provincia, a reserva de la aprobación previa de la Asamblea de la República. Los órganos de las provincias autónomas son: la asamblea, el consejo ejecutivo y los órganos administrativos, y los órganos competentes de la República supervisan el cumplimiento de las tareas encomendadas a esos órganos como parte de los derechos y obligaciones de la República.

I. Autogobierno local

68. La Constitución de la República Federativa de Yugoslavia garantiza el derecho al autogobierno local (párrafo 4 del artículo 6), que se ejerce de conformidad con las constituciones y leyes de las repúblicas miembros. En ambas repúblicas, los gobiernos autónomos locales se ejercen en un solo nivel de responsabilidad en las comunas. Además de éstas, en la República de

Montenegro la capital constituye también una entidad local autónoma, en tanto que en la República de Serbia la capital y otras ciudades compuestas de dos o más comunas urbanas tienen el mismo carácter. En la República Federativa de Yugoslavia hay 211 comunas (20 en Montenegro y 191 en Serbia). Cada comuna tiene por término medio 50.000 habitantes y una superficie de unos 500 km².

69. Los ciudadanos de cada comuna deciden, sea directamente (por medio de un referéndum), sea a través de representantes libremente elegidos, acerca de cuestiones concretas de interés público y de otros asuntos de inmediato interés para la población local. Esos asuntos han sido definidos por las constituciones y las leyes de ambas repúblicas miembros y están referidos a la planificación del desarrollo, la planificación urbana, y los servicios públicos; el desarrollo y aprovechamiento de construcciones y locales comerciales; las vías locales, calles y otros servicios públicos de importancia local; la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en lo que concierne a la cultura, la educación, la atención sanitaria y la seguridad social, la cultura física, la artesanía, el turismo, la protección ambiental, etc. Aparte de sus funciones básicas, las comunas actúan como sujetos a quienes se ha confiado la aplicación de las leyes y de otras disposiciones de las repúblicas. En este último caso, existe una supervisión jerárquica (administrativa), mientras que en la esfera de las funciones básicas los órganos gubernamentales sólo supervisan la legalidad de las operaciones de las entidades comunales. Para la ejecución de sus funciones básicas, las comunas están facultadas para obtener ingresos de las fuentes definidas por la ley; para la ejecución de las tareas específicas que les están confiadas, perciben fondos del presupuesto de la república respectiva.

70. La ley normativa básica de la comuna la constituye el estatuto aprobado por la asamblea comunal. Esta se compone de delegados elegidos por votación directa y según el método estipulado por la legislación de la república. Además de la asamblea, hay un presidente del consejo comunal (alcalde en las ciudades) y varios órganos encargados de la administración comunal. El Estado no tiene oficialmente derecho a intervenir en la elección de la administración local y de sus funcionarios. Las comunas pueden unirse si lo desean en asociaciones autónomas locales (como la asociación de comunas de las repúblicas y la Conferencia Permanente de Ciudades y Comunas de Yugoslavia).

III. MARCO JURIDICO GENERAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. Organos judiciales, administrativos y de otra índole competentes en materia de derechos humanos

71. La República Federativa de Yugoslavia, un país con un sistema jurídico de tipo continental, reconoce y garantiza las libertades del hombre y del ciudadano en sus supremos instrumentos constituyentes: la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia y las Constituciones de las Repúblicas miembros. Estos instrumentos reconocen y garantizan una amplia gama de libertades y derechos individuales, políticos, sociales, económicos y

culturales, así como los derechos específicos de las minorías nacionales sobre la base de las libertades y derechos garantizados por el derecho internacional.

72. Las constituciones prevén también un mecanismo para limitar las libertades y derechos garantizados. Esta determinación previa permite evitar cualquier abuso. En concreto, las libertades y derechos individuales del hombre y del ciudadano están limitados por los iguales derechos de los demás, y también en los casos estipulados por las Constituciones. Sin embargo, algunos de los derechos reconocidos y garantizados no pueden sufrir limitaciones ni siquiera en un estado de emergencia o de guerra.

73. Las libertades y los derechos se ejercen con arreglo a las propias Constituciones, pero en casos específicos determinados por ellas el modo de aplicación puede estipularse mediante leyes especiales. Las autoridades establecidas dentro de los órganos legislativos y ejecutivos del Gobierno federal y de los gobiernos de las repúblicas están encargados de vigilar y supervisar el ejercicio de las libertades y derechos. Además, existen en el país numerosas organizaciones no gubernamentales y asociaciones de ciudadanos creadas con el objetivo primario de vigilar el ejercicio y protección de los derechos humanos y de las minorías.

74. Las tres Constituciones imponen a cada individuo la obligación de respetar las libertades y derechos de los demás, y le consideran responsable de ello. Estos instrumentos jurídicos supremos, además de influir en los ciudadanos mediante normas políticas y declaratorias determinan que el abuso de las libertades y derechos es inconstitucional y punible y prescriben que esos derechos y libertades deben estar protegidos judicialmente, lo que significa que la infracción de esas disposiciones constitucionales será castigada por sanciones jurídicas que pueden ser penales (multas u otro tipo de sanción penal), civiles (indemnización) o medidas de cumplimiento obligado de las obligaciones inherentes a las libertades o derechos garantizados.

75. Además de la protección judicial ordinaria, el ordenamiento jurídico de Yugoslavia permite a toda persona entablar procesos ante el Tribunal Constitucional Federal para que se anule un documento o se prohíba una ley que viole las libertades y derechos garantizados por la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia.

1. Tribunales de justicia

76. Los tribunales de la República Federativa de Yugoslavia protegen las libertades y derechos de los ciudadanos, los derechos e intereses estatutarios de las entidades legales, la constitucionalidad y la legalidad. Estas funciones se ejercen a través de tribunales ordinarios y especiales. Los tribunales especiales son los tribunales comerciales y militares. Los tribunales que entienden en las causas relacionadas con la protección de los derechos humanos y las libertades son principalmente los tribunales ordinarios, es decir los tribunales comunales o, en la República de Montenegro, los tribunales primarios; los tribunales de distrito o, en

Montenegro los tribunales superiores; los tribunales supremos de las respectivas repúblicas miembros; y el Tribunal Federal como órgano judicial del Estado federal. Cuando se trata de delitos contra miembros del ejército o de ciertos delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, los procesos se desarrollan ante tribunales militares.

77. Los tribunales comunales o primarios son tribunales de primera instancia competentes en los siguientes casos, aunque no se limiten a ellos:

a) Procesos penales:

- i) dictar sentencias por actos penales para las cuales la ley prescribe una condena pecuniaria como pena principal o penas de hasta diez años de prisión, a no ser que la ley atribuya la competencia de estas causas a tribunales de distrito o superiores;
- ii) dictar sentencia por actos penales de la competencia de estos tribunales en virtud de una ley especial;
- iii) llevar a cabo investigaciones, decidir recursos sobre decisiones de los jueces investigadores y decidir las demandas sobre acusaciones por delitos penales que correspondan a su jurisdicción;

b) Causas civiles:

- i) pleitos sobre demandas de bienes, en el supuesto de que estas causas no sean de la competencia de un tribunal comercial;
- ii) litigios sobre matrimonios existentes o no, anulaciones de matrimonio y divorcios;
- iii) litigios sobre confirmación o denegación de maternidad o paternidad;
- iv) litigios sobre pensiones alimenticia y custodia y educación de los hijos;
- v) litigios sobre actos ilegales que impidan la utilización de bienes;
- vi) litigios sobre viviendas.

- c) Litigios laborales:
 - i) litigios sobre empleo y pérdida del empleo;
 - ii) litigios sobre la firma y aplicación de contratos colectivos de trabajo y cualquier litigio entre trabajadores y sindicatos;
 - iii) litigios sobre la aplicación de los reglamentos sobre el derecho de huelga;
- d) Procedimientos de aplicación de las decisiones de los tribunales;
- e) Litigios sobre demandas de indemnización basadas en veredictos injustificados y detención ilegal;
- f) Además de las esferas de competencia ya citadas, los tribunales comunales o primarios pueden revisar causas y, en respuesta a peticiones, proponer la anulación de una decisión judicial o la cesación de medidas de seguridad o de las consecuencias jurídicas de esas medidas en todos los casos en que hayan dictado esas decisiones o medidas.

78. El arbitraje de las causas penales vistas en estos tribunales corre a cargo de un grupo formado por un juez profesional y dos jueces no letrados, excepto en las causas penales castigadas con una pena de prisión de hasta un año o una pena pecuniaria (que son juzgadas por un solo juez). La investigación se asigna a un juez instructor y sólo excepcionalmente a la policía (generalmente por orden de un juez instructor) mientras que los recursos contra la decisión de un juez instructor son resueltos por un tribunal de tres miembros.

79. En las causas civiles, el arbitraje en los tribunales comunales o primarios corresponde a un tribunal formado por un juez profesional y dos jueces no letrados. Un único juez (unus iudex) administra justicia en los litigios sobre bienes hasta un cierto valor, así como en los litigios sobre prevención de utilización de bienes. Además, un único juez se ocupa de los procedimientos para hacer cumplir la ley.

80. Los tribunales de distritos o superiores son principalmente tribunales de apelación, pero también pueden actuar como tribunales de primera instancia en los casos específicos que dicte la ley.

- a) Los tribunales de distrito o superiores, en tanto que los tribunales de apelación, deciden sobre los recursos contra las decisiones de tribunales inferiores. En general un proceso ante los tribunales comprende dos etapas. Toda decisión en primera instancia puede apelarse y, en casos especiales, se prevé un proceso en tres etapas. Cuando los tribunales de apelación (en este caso tribunales de distrito o superiores) entienden de recursos contra las decisiones de tribunales de primera instancia pueden rechazar el recurso por inoportuno o ilícito o por estimarlo injustificado y confirmar el

veredicto dictado por el tribunal inferior, o pueden suspender la decisión y devolver la causa al tribunal inferior para que vea de nuevo o cambie el veredicto original. Esto significa que al dictar sentencia sobre los recursos de apelación la jurisdicción de estos tribunales abarca las funciones de los tribunales de casación y de apelación (el sistema judicial de la República Federativa de Yugoslavia no distingue entre tribunales de casación y tribunales de apelación como instituciones separadas).

- b) Los tribunales de distrito o superiores, actuando en calidad de tribunales de primera instancia, cumplen las siguientes funciones:
 - i) dictar sentencia en causas sobre delitos penales castigados con pena de prisión de más de diez años o con la pena capital, así como sobre delitos penales que la ley pone bajo su jurisdicción (por ejemplo el delito penal de instigar al odio, la discordia o la intolerancia nacionalista, racial y religiosa, organizar grupos e inducirlos a cometer genocidios y crímenes de guerra, los delitos cometidos por jueces, la violación, el homicidio, la incitación al suicidio y la complicidad en el suicidio);
 - ii) llevar a cabo investigaciones, dictar sentencias sobre recursos contra las decisiones de jueces investigadores y decidir sobre demandas contra autos de acusación por delitos penales que entren en su jurisdicción;
- c) Los tribunales de distrito o superiores dictan sentencias en litigios sobre la veracidad de informaciones difundidas por los medios de comunicación.
- d) Estos tribunales deciden también sobre las peticiones de anulación de veredictos basados en decisiones de los tribunales y sobre las peticiones para que cesen las medidas de seguridad o las consecuencias jurídicas de veredictos relacionados con la prohibición de adquirir ciertos derechos, siempre que esos veredictos o medidas fueran dictadas por estos tribunales.
- e) Aplican también los procedimientos sobre solicitud de entrega de personas condenadas o acusadas y deciden sobre esas peticiones.
- f) Debe subrayarse una competencia específica de estos tribunales. Deciden sobre propuestas para la protección de las libertades y los derechos estipulados por la Constitución cuando esas libertades y derechos han sido violados por un acto de un funcionario del Gobierno o de una persona responsable de una empresa y no existe otra protección judicial. Cuando un único acto final viola libertades y derechos y no se ha previsto una protección judicial específica, la cuestión pasa al Tribunal Supremo. (Se ofrecen más pormenores infra.)

81. Los tribunales de distrito o superiores actuando en calidad de tribunales de apelación, arbitran mediante un grupo de cinco jueces las causas penales que les llegan, es decir cuándo deben decidir sobre demandas. Cuando los delitos deben castigarse con penas poco severas el tribunal está formado por tres jueces. Si el tribunal arbitra como tribunal de apelación en una causa (si se necesitan nuevas pruebas o si debe repetirse la presentación de las pruebas porque las conclusiones fueron incorrectas o incompletas, o si hay motivos justificados para no devolver el caso al tribunal de primera instancia), el tribunal es mixto y está formado por dos jueces profesionales y tres jueces no letrados.

82. Los tribunales de distrito, o superiores, cuando actúan como tribunales de primera instancia, arbitran mediante un grupo de dos jueces profesionales y tres jueces no letrados en caso de delitos punibles con 15 años de prisión o una pena más grave.

83. En general, cuando se deciden recursos sobre causas civiles realiza el arbitraje, sin audiencia, un grupo de tres jueces. Si debe verse la presentación de nuevas pruebas en el proceso de apelación, el tribunal está formado por dos jueces profesionales y tres jueces no letrados.

84. Los tribunales de nivel superior de la República de Serbia y de la República de Montenegro que suelen arbitrar los recursos contra las decisiones de tribunales inferiores son los tribunales supremos. En la mayoría de los casos los procesos terminan ante estos tribunales, es decir en el nivel de los órganos judiciales de la respectiva república.

85. Los tribunales supremos tienen las siguientes competencias: decidir sobre recursos contra decisiones adoptadas por tribunales de distrito o superiores; decidir sobre recursos extraordinarios contra decisiones válidas de los tribunales en los casos previstos por la ley; decidir sobre recursos en tercera instancia contra veredictos dictados por tribunales de apelación de segunda instancia en la República; y decidir sobre recursos contra decisiones adoptadas por un grupo de jueces del Tribunal Supremo.

86. Debe señalarse que el Tribunal Supremo está facultado para adoptar decisiones en primera instancia relativas a solicitudes de protección de libertades y derechos estipulados por la Constitución, si esas libertades y derechos fueron violados por un acto único y decisivo y no existe otra protección judicial concreta.

87. La composición de este tribunal cuando adopta decisiones en segunda instancia es idéntica a la composición de los tribunales de distrito o superiores que se ocupan de recursos. En tales casos, su jurisdicción tiene carácter de casación y de apelación, como en el caso de los procesos en segunda instancia en tribunales de distrito o superiores sobre decisiones de tribunales comunales u ordinarios. Un grupo de cinco o tres jueces falla los recursos extraordinarios. Cuando actúa como tribunal de tercera instancia el tribunal está formado por cinco jueces.

88. Debe señalarse que los procesos en tercera instancia sólo tienen lugar en las causas en que un tribunal de segunda instancia ha dictado una sentencia de muerte o de 20 años de prisión, o si ha confirmado una sentencia de este tipo dictada por un tribunal de primera instancia. El procedimiento en tres etapas se aplica también cuando el tribunal de segunda instancia cambia el veredicto del tribunal de primera instancia que absolvía al acusado y lo condena.

89. Si el Tribunal Supremo debe adoptar decisiones en causas en segunda y tercera instancia, los jueces que participaron en los procesos en segunda instancia no pueden formar parte del grupo de tercera instancia.

90. El Tribunal Federal es el tribunal del Estado Federal y no el tribunal de instancia superior del sistema judicial de la República Federativa de Yugoslavia. (En general se asigna esta función a los tribunales supremos de las respectivas repúblicas.) Las esferas de competencia del Tribunal Federal están definidas en la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia y en una ley separada, o Ley sobre el Tribunal Federal y el reglamento de procedimiento judicial (causas penales y litigios). La jurisdicción de este tribunal en la esfera de la protección de los derechos humanos y las libertades abarca los siguientes elementos:

- a) juicios sobre recursos legales extraordinarios contra decisiones de tribunales de las repúblicas miembros y tribunales militares en cuestiones relativas al cumplimiento del derecho federal;
- b) fallos sobre la legalidad de decisiones administrativas definitivas de organismos federales.

91. Además de los tribunales de jurisdicción general ya citados, los tribunales militares tienen también ciertas competencias en la esfera de la protección de los derechos humanos y las libertades. Los tribunales militares de la República Federativa de Yugoslavia forman parte del sistema judicial y aplican procesos y reglamentos materiales aplicados también por los tribunales de la jurisdicción general. En otras palabras, los tribunales militares, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, no forman un sistema judicial especial que aplique leyes especiales. Existen tanto en época de paz como de guerra. Los Convenios de Ginebra de 1949 sobre la protección de las víctimas de la guerra (ratificados por Yugoslavia en 1954) prevén la obligación de crear tribunales militares en época de guerra, de conformidad con los convenios; los procesos contra prisioneros de guerra entran en la jurisdicción de los tribunales militares.

92. La Ley sobre tribunales militares reglamenta la organización de los tribunales militares. Hay tribunales militares de primera instancia y el Tribunal Militar Supremo, que es el tribunal de segunda instancia y el tribunal superior. El Tribunal Militar Supremo tiene una jurisdicción completa de segunda instancia, es decir que sus competencias no están divididas entre los tribunales de distrito y el Tribunal Supremo de una república miembro, como en el caso de los tribunales de jurisdicción general.

El Tribunal Militar Supremo es al mismo tiempo el tribunal de tercera instancia en relación con las decisiones del mismo tribunal, cuando se ven procesos en tres niveles.

93. Los tribunales militares tienen competencia, entre otras cosas, para ocuparse de todos los delitos cometidos por miembros del ejército; de procesos contra prisioneros de guerra, por cualquier delito que hayan cometido como prisioneros de guerra; y de procesos contra civiles que sirvan en el ejército de Yugoslavia por delitos cometidos por esas personas en el cumplimiento de sus deberes o en relación con ese cumplimiento.

94. Estos tribunales aplican en su casi totalidad la Ley sobre procesos penales, aplicada también por los tribunales de jurisdicción general, con unas pocas excepciones debidas a formas de organización distintas.

2. Organismos administrativos

95. La Constitución de la República Federativa de Yugoslavia, las disposiciones de las constituciones de las repúblicas miembros y determinadas leyes constituyen el marco legal que regula las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. Estas relaciones se basan en el principio de la legalidad; en otras palabras, la relación entre la administración pública y los ciudadanos se funda en la aplicación coherente de leyes y reglamentos. A este fin, se ha creado un sistema de supervisión de la administración que adopta distintas formas: administrativa, judicial, etc.

96. La situación de los ciudadanos en relación con la administración estatal se inscribe en las siguientes situaciones jurídicas:

- a) la situación jurídica en la que la administración del Estado no puede violar con sus actos y actividades los siguientes derechos: la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de creación científica y artística, la libertad de creencias, la inviolabilidad de la persona y la igualdad entre los ciudadanos;
- b) la situación jurídica en la que el ciudadano tiene derecho a pedir a la administración del Estado que adopte medidas definidas (se trata principalmente de derechos socioeconómicos: el derecho al trabajo, el derecho a unas horas limitadas de trabajo, el derecho a la huelga, el derecho a la seguridad social, el derecho de menores y mujeres a una protección especial en las relaciones laborales, el derecho a la educación, etc.);
- c) el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política y social del país, así como en los asuntos públicos (el derecho de voto, la libertad de prensa, etc.).

97. Desempeñan las funciones administrativas públicas dos tipos de organismos gubernamentales y no gubernamentales, a saber empresas, organizaciones y comunidades con competencias públicas. Estos organismos

están facultados para decidir si reconocen o retiran un derecho a una persona, si prescriben una obligación para una persona o si liberan a esa persona de una obligación. En sus actuaciones, estos organismos están obligados, entre otras cosas, a respetar los derechos de los ciudadanos garantizando al mismo tiempo la eficiencia de la administración y a aplicar las medidas que sean más favorables a los ciudadanos y a la administración. Un organismo de segunda instancia que responda a una denuncia puede alterar la decisión en primera instancia si demuestra que el fin perseguido con tal decisión puede conseguirse por otros medios más favorables para la parte afectada. Además, debe señalarse que el organismo autorizado a aplicar una decisión lo hará del modo que sea menos gravoso para la parte interesada.

98. Los reglamentos sobre procedimientos administrativos contienen normas que regulan las actividades y la adopción de instrumentos por parte de organismos gubernamentales, empresas y otras personas jurídicas, cuando mediante la aplicación directa de reglamentaciones en cuestiones administrativas decidan sobre los derechos, obligaciones e intereses jurídicos de individuos y personas jurídicas y contienen también normas sobre los derechos y obligaciones de las partes que intervienen en procedimientos administrativos.

99. Los procesos administrativos en los que organismos y organizaciones gubernamentales a las que se confía la aplicación de competencias públicas adoptan decisiones administrativas sobre los derechos y obligaciones de un individuo o de una organización en una materia administrativa, están reglamentados principalmente por la Ley federal sobre procesos generales administrativos. Los principios básicos de estos procedimientos establecidos por la citada ley son prácticamente idénticos a los principios en los que se basan los procesos judiciales (las pequeñas diferencias existentes se deben al carácter de cada proceso), esto es: los principios de eficiencia, de verdad material, de audiencia de la parte interesada, de valoración libre de las pruebas, principio de independencia en la adopción de decisiones, de las dos instancias (derecho a apelar), de la irrevocabilidad de la decisión, del proceso económico, de la prestación de asistencia a una parte y de la utilización del idioma materno en los procesos administrativos.

100. El organismo competente entabla el procedimiento administrativo de oficio o a petición de una de las partes. Antes de adoptar una decisión, el organismo debe determinar todos los hechos y circunstancias pertinentes y permitir a las partes ejercer y proteger sus derechos e intereses legales. El organismo puede decidir sobre el asunto mediante un procedimiento de urgencia o a través de procedimientos especiales de investigación. El organismo puede decidir en procedimientos de urgencia sólo en los casos previstos por la citada ley.

101. Las partes interesadas tienen derecho a participar en los procesos de investigación y a defender sus derechos e intereses. Pueden presentar hechos y pruebas en relación con el caso y denegar declaraciones que disientan de sus declaraciones propias. El debate oral es obligatorio en las causas en que intervienen dos o más partes con intereses contrapuestos o cuando es necesario investigar sobre el terreno u oír a testigos o expertos, y el organismo encargado del proceso puede, por iniciativa propia o a petición de

parte, prescribir un debate oral en cada caso, si ello puede contribuir a esclarecer el asunto. El organismo competente permitirá a la parte exponer su opinión sobre todos los hechos presentados en el proceso de investigación, así como sobre cualquier otro hecho en que deba basarse una decisión.

102. El proceso administrativo se concluye mediante una decisión acompañada por una explicación y se presenta a la parte. Puede apelarse por la vía ordinaria contra la decisión de primera instancia, y esta posibilidad sólo puede excluirse por ley. Los recursos de apelación extraordinarios determinados por la ley ya citada pueden utilizarse también contra la decisión final o válida.

103. El sistema jurídico de Yugoslavia prevé también la posibilidad de una revisión judicial de actos administrativos. Con arreglo a los términos de la Ley federal de procedimiento administrativo, es posible entablar procesos administrativos presentando una demanda ante el tribunal competente, el cual decide sobre la legalidad del acto administrativo denunciado. La demanda debe contener, además de los datos del demandante, el acto administrativo contra el cual está dirigida, una breve justificación del recurso presentado y en qué medida y cómo debería anularse el acto administrativo.

104. El tribunal puede rechazar una demanda en los casos que determina la ley o anular un acto administrativo sin presentar la demanda para su réplica. En caso contrario, presentará la demanda con los documentos adjuntos para que el acusado (la autoridad cuyo acto se denuncia) y, en su caso, las partes interesadas, respondan. La respuesta debe presentarse en el plazo prescrito por el tribunal, y la parte denunciada debe presentar al tribunal todos los documentos relativos al caso.

105. En general, las sesiones de los tribunales que se ocupan de procesos administrativos no son públicos pero el tribunal está facultado, por decisión propia o a petición de una parte, a celebrar una vista oral si así lo exige la complejidad del asunto en litigio o si lo considera necesario para esclarecer el caso.

106. El tribunal decide sobre un litigio basándose en los hechos determinados en el proceso administrativo. Si el tribunal considera que el litigio no puede resolverse sobre la base de los hechos determinados en el proceso administrativo, adoptará una decisión que anule el acto administrativo denunciado, y ordenará al organismo en cuestión que adopte un nuevo acto administrativo, o determinará por sí mismo los hechos relativos al caso y fundándose en ellos dictará sentencia, es decir, adoptará una decisión.

107. Si se celebra una vista oral, el tribunal inmediatamente después de cerrarse el debate dictará su decisión indicando las razones principales en que se basa. En casos complejos, el tribunal puede decidir no dictar sentencia oral, pero deberá adoptar una decisión en un plazo máximo de ocho días. La sentencia, es decir la decisión, deberá ir acompañada por una explicación. Las partes recibirán copias certificadas de la decisión del tribunal.

108. Los procesos administrativos son, en general, procesos de una sola instancia, pero en algunos casos es posible recurrir una demanda contra una decisión de un tribunal o presentar recursos de aprobación extraordinarios.

109. Una de las tres formas básicas de vigilancia judicial de la legalidad de los actos administrativos es la protección judicial de las libertades y derechos garantizados por la Constitución frente a actos jurídicos individuales ilegales o actuaciones ilegales. Esta vigilancia comprende todos los actos jurídicos individuales y no solamente los administrativos, pero sólo puede pedirse la intervención judicial si no existe otra protección jurídica. En tal caso, los organismos competentes son: el Tribunal Federal en relación con actos individuales de organismos y organizaciones federales; el Tribunal Militar Supremo en el caso de actos individuales de autoridades militares, o el Tribunal Supremo de una república miembro en caso de actos de otro organismo.

3. El Tribunal Constitucional

110. La Constitución de la República Federativa de Yugoslavia prevé también la posibilidad de proteger los derechos y libertades que ella reconoce recurriendo al Tribunal Constitucional Federal y, en el caso de las Constituciones de las repúblicas, a los Tribunales Constitucionales de las repúblicas.

111. Además de los procesos para dictaminar sobre la constitucionalidad y legalidad de leyes generales, pueden entablarse procesos ante el Tribunal Constitucional mediante una denuncia constitucional sobre la protección de los derechos y libertades garantizadas por la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia, procesos sobre la prohibición de partidos políticos y asociaciones de ciudadanos y procesos sobre la violación de derechos por parte de organismos federales durante una elección.

112. Cualquier persona que considere violados sus derechos y libertades como ser humano y como ciudadano garantizados por la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia como consecuencia de un acto individual o de la acción de organismos judiciales, administrativos o de otra índole o de empresas u organizaciones que gocen de autoridad pública, puede presentar una demanda constitucional si no se prevé otra protección jurídica. Además de la parte perjudicada, puede presentar una demanda constitucional en nombre de esa parte una asociación de ciudadanos u otra personalidad jurídica que trabaje para la protección de las libertades y derechos, así como el Ministro Federal de Derechos Humanos y de las Minorías a petición de cualquier individuo o por decisión propia. Si el Tribunal Federal determina que un acto individual ha violado una libertad o derecho de un individuo o ciudadano garantizado por la Constitución, anulará ese acto y ordenará la eliminación de todas las consecuencias que de él se deriven. Si una acción ha violado una libertad, el tribunal prohibirá la repetición de tal acción. Si un acto o acción individual ha violado las libertades y derechos de varias personas, garantizados por la Constitución, y sólo una de esas personas ha presentado una demanda constitucional, la decisión del tribunal se aplicará también a las personas que no presentaron la correspondiente demanda.

113. El organismo del Estado encargado de la inscripción de partidos políticos y de asociaciones de ciudadanos, el Fiscal General o el fiscal de una república pueden presentar una propuesta para entablar un proceso de prohibición de la actuación de partidos políticos y de asociaciones de ciudadanos.

114. Cualquier votante, candidato a diputado federal y proponentes de candidatos o listas de candidatos de un partido político pueden presentar una demanda contra una decisión de la Comisión Electoral Federal rechazando o desestimando la objeción contra esa decisión. Si el tribunal acepta la demanda, anulará el proceso electoral o una parte de ese proceso, indicándolo claramente. Este tribunal se ocupa también de los procesos sobre violaciones de los derechos durante elecciones para Presidente de la República, Presidente del Gobierno Federal, jueces del Tribunal Constitucional Federal, Fiscal Federal y su suplente, jueces del Tribunal Federal y Gobernador del Banco Nacional de Yugoslavia.

B. Recursos de que disponen las personas que afirman que se han violado sus derechos y medios de indemnización y rehabilitación para las víctimas

115. La Constitución de la República Federativa de Yugoslavia y las Constituciones de las repúblicas miembros garantizan el derecho a presentar demandas u otros recursos contra una decisión que afecte sus derechos o intereses legítimos. Este derecho está reglamentado por todas las leyes que rigen los procedimientos pertinentes: penales, judiciales, administrativos y de infracción. La Constitución de la República Federativa de Yugoslavia introduce por primera vez un nuevo recurso legal: la demanda constitucional presentada ante el Tribunal Constitucional Federal.

116. En los procesos penales puede presentarse una demanda como recurso ordinario contra decisiones de los tribunales de primera instancia. La decisión del tribunal de segunda instancia es por regla general válida, es decir que no es posible presentar otros recursos legales contra esta decisión; sin embargo, es posible en ciertas circunstancias prescritas por la ley presentar un recurso extraordinario. Estos recursos de apelación son de carácter extraordinario y no pueden presentarse por una violación cualquiera de la ley. Los recursos extraordinarios que pueden presentarse en procesos penales contra decisiones válidas son los siguientes: una solicitud para que se repita el proceso, una solicitud para que se aplique una mitigación extraordinaria de un castigo, una solicitud para que se proteja la legalidad ^{3/} y una petición para una revisión extraordinaria de una decisión válida de un tribunal.

117. Una demanda es un recurso legal ordinario que puede presentarse ante un tribunal de segunda instancia contra decisiones de tribunales de primera instancia en litigios. El fallo y la decisión del tribunal de segunda instancia se convierte en válida y aplicable. Pueden presentarse recursos extraordinarios contra decisiones válidas dictadas en procesos judiciales en las condiciones que prescribe la ley.

118. También se permite una demanda como recurso ordinario contra decisiones de primera instancia de organismos administrativos. En los procesos administrativos la parte tiene el derecho de presentar, en los casos prescritos por la ley, una demanda especial contra la conclusión adoptada por un organismo administrativo. La parte puede formular una objeción a un acto de un organismo administrativo, aunque esto no tenga el carácter de un recurso de apelación. En general, la objeción como medio legal no tiene poder de devolución. Dicho con otras palabras, en general, la decisión sobre una objeción no se traslada a una autoridad de instancia superior; el organismo al que se presenta la objeción decide sobre ella, y la parte interesada puede elevar al organismo responsable de los procedimientos administrativos un recurso oficioso (petición) indicando que se han violado sus derechos. Los recursos extraordinarios en procesos administrativos comprenden medios jurídicos para que asuntos administrativos en los que se ha llegado a una decisión final o válida se debatan o se decidan de nuevo a fin de eliminar posibles irregularidades o ilegalidades. Estos medios son los siguientes: reanudación de un caso, cambio o anulación de una decisión relativa a un litigio administrativo, solicitud de protección de la legalidad, anulación y desestimación de una decisión sobre el derecho a vigilancia, anulación y revisión de la decisión con el consentimiento de la parte o a petición suya, anulación extraordinaria de una decisión, o proclamación de que una decisión es nula e inválida.

119. La Constitución de la República Federativa de Yugoslavia y las Constituciones de las repúblicas miembros garantizan el derecho a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a la rehabilitación en algunos casos. Los mecanismos de indemnización y rehabilitación están regulados por leyes separadas.

120. La Constitución del Estado federal y las Constituciones de las repúblicas miembros prescriben que una persona convicta de un delito o privada de su libertad sin motivo tiene derecho a la rehabilitación, a la indemnización por el Estado por daños y perjuicios y a otros derechos prescritos por la ley.

121. El derecho a la indemnización por daños y perjuicios, rehabilitación y ejercicio de otros derechos de las personas condenadas sin justo motivo o privadas de libertad sin razón está reglamentado por la ley de procedimiento penal. Una persona condenada por una sentencia jurídicamente efectiva tiene derecho a recibir una indemnización por los daños y perjuicios causados por la condena injustificada si se ha interrumpido el proceso o si se ha absuelto legalmente a esa persona a consecuencia de la aplicación de un recurso extraordinario. También tiene derecho a indemnización toda persona a la que se haya privado de su libertad sin motivo, sin que se cumplieran los requisitos legales o si estas condiciones dejaron de existir.

122. Se indemnizan todos los tipos de daños y perjuicios, causados a bienes y a lo que no son bienes, es decir, todo lo que se considera daños y perjuicios con arreglo al derecho sobre bienes. Los organismos administrativos y el tribunal deciden sobre la indemnización que corresponda. Se ocupa del proceso de indemnización por daños y perjuicios el organismo

administrativo, siendo subsidiario el proceso judicial. Es decir, que la persona que ha sufrido daños y perjuicios negocia con el organismo administrativo correspondiente la existencia de esos daños y perjuicios y el tipo y el valor de la indemnización. En este proceso se aplican las disposiciones sobre procedimientos administrativos generales. Si el organismo administrativo no llega a una decisión en un plazo de tres meses desde la presentación de la demanda de indemnización por daños y perjuicios, la persona que ha sufrido esos daños y perjuicios puede entablar una acción ante los tribunales para obtener tal indemnización por daños y perjuicios.

123. Si un caso de condena injustificada o de privación sin motivo de la libertad de una persona es difundido por los medios de comunicación dañando así la reputación de esa persona, el tribunal, a petición de la víctima, publicará una declaración en un periódico u otro medio de información afirmando que la condena fue injustificada, o que la privación de libertad careció de fundamento. Si esa información no se publica en los medios informativos, se enviará esa declaración a petición de la persona que sufrió el perjuicio, a su empleador, empresa u otra institución, y a cualquier institución que deba recibirla en interés de la rehabilitación.

124. Hay que señalar que esta reparación o compensación moral también es posible en los casos en que no hay motivos para reclamar una indemnización si la reputación de la persona condenada quedó seriamente menoscabada por la calificación jurídica del acto.

125. Si la sentencia no estaba justificada, el tribunal que arbitró en primera instancia decidirá anular la inscripción de la sentencia injustificada en los antecedentes penales. Los datos sobre la inscripción anulada no estarán a la disposición de todos. La Ley sobre procedimiento penal prescribe de modo explícito que la persona a quien se permita estudiar o copiar documentos relativos a una sentencia injustificada o a una privación de libertad infundada no debe utilizar los datos de los documentos de modo que perjudique la rehabilitación de la persona contra la cual se entabló el proceso penal. Según declara explícitamente la ley, una persona que perdió su trabajo o su condición de afiliado a la seguridad social a causa de una sentencia injustificada o de una privación de libertad infundada tiene derecho a que se le reconozca el tiempo perdido por la sentencia injustificada o la privación de libertad infundada como período de servicio o de cotización en la seguridad social, como si hubiese estado empleada. También se considera como período de empleo la duración del desempleo debido a una sentencia o una privación de libertad sin que la persona fuera culpable.

126. La Ley sobre obligaciones reglamenta los asuntos de indemnización por perjuicios pecuniarios en casos de difamación y calumnia, así como la indemnización por los daños que se deriven de ello. La Ley reglamenta la obligación de toda persona que insulte a otra o difunda hechos falsos sobre ella, su pasado, sus conocimientos, sus capacidades o cualquier otra cosa a sabiendas de que son falsos y, por lo tanto causando daños materiales a esa persona, de indemnizarla por daños y perjuicios.

127. En caso de violación de los derechos personales, el tribunal puede ordenar la publicación de la sentencia a expensas del transgresor, ordenar al transgresor que retire la declaración ofensiva, o tomar cualquier otra medida que cumpla el objetivo de la compensación.

128. En caso de dolores físicos, dolor espiritual debido a discapacidad, deformidad, infamia, difamación, violación de la libertad o de los derechos personales, fallecimiento de un ser querido y temor, el tribunal, si las circunstancias lo justifican, puede ordenar una indemnización pecuniaria justa, con independencia de si se han impuesto o no otras compensaciones por daños materiales.

129. Toda persona víctima de violación o de abusos sexuales con fraude, coacción o abuso de una relación, o que haya sido objeto de otro acto delictivo contra su dignidad o moralidad, tiene derecho a una indemnización pecuniaria justa.

130. Si una persona fallece o resulta herida o si los bienes de un individuo son destruidos o dañados durante una manifestación pública o por un acto de violencia o de terror, las personas autorizadas legalmente para pedir indemnización por los daños y perjuicios causados pueden denunciar a los organismos del Estado responsables de la prevención de esos daños.

131. La Constitución Federal y las Constituciones de las repúblicas miembros garantizan el derecho a que se corrija una información publicada incorrecta que infrinja el derecho o los intereses de alguien, así como el derecho a recibir indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

132. Los instrumentos jurídicos de mayor rango del Estado Federal y de las repúblicas miembros garantizan el derecho a la indemnización por daños y perjuicios materiales y consiguientes causados por un organismo oficial o del Estado o por una organización con autoridad pública por un acto ilegal o una irregularidad.

C. ¿Están protegidos por la Constitución o por una carta especial de derechos los derechos estipulados por los distintos instrumentos de derechos humanos y, en tal caso, qué disposiciones de la Constitución o de la carta de derechos se aplican a su violación y en qué términos?

133. Los derechos estipulados por los distintos instrumentos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos están protegidos por la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia, las Constituciones de la República de Serbia y de la República de Montenegro y por las leyes. No existe una carta especial de derechos humanos y de libertades en la República Federativa de Yugoslavia, puesto que más de una tercera parte del texto de la Constitución está dedicado a los derechos humanos y libertades. Leyes especiales federales y de las repúblicas reglamentan las cuestiones de la protección y violación de derechos garantizados por la Constitución, según sea la materia de que se ocupe cada ley.

134. El artículo 67 de la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia prescribe lo siguiente:

"Las libertades y derechos del hombre y del ciudadano se ejercerán y las obligaciones se cumplirán con arreglo a la Constitución.

La ley puede prescribir el modo de ejercicio de los derechos individuales y de las libertades del hombre y del ciudadano si así lo dispone la Constitución o si resulta necesario para su aplicación.

El abuso de los derechos y libertades del hombre y del ciudadano será inconstitucional y punible.

Los derechos y libertades reconocidos y garantizados por la actual Constitución disfrutarán de la protección de los tribunales."

135. El artículo 12 de la Constitución de la República de Serbia estipula lo siguiente:

"Las libertades y derechos se ejercerán y las obligaciones se cumplirán con arreglo a la Constitución, salvo si la Constitución estipula que la ley debe determinar las condiciones para ejercer algunos derechos y libertades.

La ley puede prescribir el modo de ejercicio de diversos derechos y libertades si ello es necesario para su aplicación.

El abuso de los derechos y libertades del hombre y de los ciudadanos es inconstitucional y punible con arreglo a la ley.

Las libertades y derechos garantizados y reconocidos por la Constitución disfrutarán de la protección de los tribunales."

136. El artículo 16 de la Constitución de la República de Montenegro estipula lo siguiente:

"Las libertades y derechos son inviolables.

Todos estarán obligados a respetar las libertades y los derechos de los demás.

El abuso de las libertades y derechos será inconstitucional y punible."

D. ¿Cómo se han incorporado los instrumentos de derechos humanos al ordenamiento jurídico interno?

137. Los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos, después de su ratificación por los organismos competentes y su publicación en un medio oficial de comunicación, pasan a ser parte del ordenamiento jurídico de Yugoslavia.

138. La ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos se realiza mediante una ley preparada por el Gobierno Federal y aprobada por la Asamblea Federal. El Presidente de la República Federativa de Yugoslavia publica los documentos sobre los tratados internacionales ratificados.

E. ¿Los tribunales u organismos administrativos pueden invocar las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos o aplicarlas directamente en la práctica o deben transformarse primero en leyes internas o reglamentos administrativos antes de que puedan aplicarlas los organismos competentes?

139. El artículo 16 de la Constitución federal estipula lo siguiente:

"La República Federativa de Yugoslavia cumplirá de buena fe las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los cuales sea parte contratante.

Los tratados internacionales que se hayan ratificado y promulgado con arreglo a la presente Constitución y a las normas del derecho internacional aceptadas de modo general serán parte constitutiva del ordenamiento jurídico interno."

140. Con arreglo a la disposición constitucional citada, los instrumentos de derechos humanos ratificados y promulgados se convierten en parte del ordenamiento jurídico de la República Federativa de Yugoslavia y se aplican directamente como tales.

F. ¿Existe alguna institución u órgano nacional encargado de vigilar la aplicación de los derechos humanos?

141. El Ministerio federal de derechos humanos y de las minorías, creado a este fin en julio de 1992, se ocupa en general de vigilar los derechos humanos. Este ministerio desarrolla actividades relacionadas con los siguientes temas: el ejercicio de los derechos humanos y de los derechos de los ciudadanos reconocidos por la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia, especialmente la vigilancia de la situación y la supervisión administrativa de la aplicación de los reglamentos federales sobre derechos humanos y de las minorías; el ejercicio de los derechos de las minorías garantizados por la Constitución federal, los reglamentos federales y los tratados internacionales; la protección de los derechos humanos con arreglo al derecho humanitario, la protección de los bienes personales y otros derechos y libertades de los refugiados procedentes de zonas de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia y su protección jurídica internacional; la promoción y elaboración de las leyes de la República Federativa de Yugoslavia relativas a los derechos y libertades humanos y del ciudadano con arreglo a los instrumentos internacionales pertinentes; la cooperación y las relaciones y con instituciones y organismos yugoslavos e internacionales para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos; la vigilancia de la situación de miembros de los pueblos

de la República Federativa de Yugoslavia en el exterior; y el inicio de procedimientos ante organismos competentes para proteger los derechos y libertades humanos y del ciudadano.

142. La Asamblea Federal tiene una Comisión sobre libertades, derechos y obligaciones del hombre y del ciudadano autorizada para examinar cuestiones relativas al ejercicio de los derechos humanos y para adoptar decisiones y alcanzar conclusiones en esta esfera. Existen comisiones semejantes en las Asambleas de las repúblicas miembros. Se ha creado un organismo especial en la República de Montenegro: el Consejo de la República para la protección de los derechos nacionales y de las minorías, que vigila las relaciones y los fenómenos que repercuten en el ejercicio y respeto de los derechos de grupos nacionales y minoritarios reconocidos por la Constitución y que informa a los organismos e instituciones competentes sobre sus observaciones, opiniones y sugerencias a fin de que se adopten las medidas adecuadas. Cualquier ciudadano, organización u organismo puede entablar un proceso ante el Consejo. El Consejo recibe información de los organismos e instituciones sobre las correspondientes medidas adoptadas si se entabla un proceso sobre la base de sus recomendaciones, iniciativas y sugerencias.

143. El ejercicio de los derechos humanos está también supervisado, en sus respectivas competencias, por el Tribunal Constitucional Federal, los tribunales ordinarios, las oficinas del ministerio público y otros organismos del Estado. Se está estudiando la idea de crear una institución especial encargada de proteger los derechos de los ciudadanos (ombudsman). También hay en el país organizaciones no gubernamentales, asociaciones y movimientos que trabajan en la protección de los derechos humanos.

IV. INFORMACION Y PUBLICIDAD

144. Todos los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos ratificados por Yugoslavia deben publicarse en el Diario Oficial y el público en general puede obtenerlos fácilmente. Estos instrumentos se publican de modo regular en el idioma original (inglés/francés), junto con su traducción oficial que se publica en los idiomas de uso oficial en la República Federativa de Yugoslavia. Los tribunales y otros organismos del Estado tienen la obligación de aplicar directamente los tratados internacionales ratificados y publicados y, por lo tanto, están obligados a conocerlos de modo cabal. Algunos ministerios publican también los instrumentos importantes (en forma de publicaciones separadas, boletines, etc.) y hay también algunas revistas profesionales y científicas financiadas por el Estado que, de conformidad con sus políticas de edición, publican, interpretan y difunden algunos instrumentos. La televisión y parte de la prensa contribuyen también a un conocimiento creciente de los derechos que figuran en distintos instrumentos de derechos humanos. El Centro de Información de las Naciones Unidas, mientras estuvo funcionando en Yugoslavia (Belgrado), contribuyó a difundir información sobre esos instrumentos mediante sus publicaciones propias y la distribución de

publicaciones de las Naciones Unidas. Desde la introducción de sanciones contra la República Federativa de Yugoslavia, la información procedente de fuentes exteriores se ha reducido mucho, lo cual es muy perjudicial.

145. Algunos ministerios federales tienen la obligación de informar sobre la situación de los derechos humanos (el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, el Ministerio Federal de Justicia, el Ministerio Federal de Derechos Humanos y de las Minorías y otros), con arreglo a sus competencias. Estos informes se verifican mediante un procedimiento oficial, no se someten a debate público y, en general están a disposición de los medios de comunicación. Como ya se ha señalado, la información y otras aportaciones del exterior son hoy en día muy limitadas.

1/ Hasta ahora no se han procesado todos los segmentos del censo de 1991. En consecuencia, la información estadística presentada corresponde a las últimas cifras disponibles. El censo para 1991 no se ha llevado a cabo plenamente en Kosovo y Metohija (debido a la negativa de la población albanesa de participar en él), por lo cual las cifras correspondientes a la población albanesa son sólo estimaciones hechas con arreglo a una metodología estadística bien probada.

2/ La rúbrica "Otros" incluye a valacos (17.810), rutenos (18.339), turcos (11.501), bunyevtsis (21.434), judíos (1.230), griegos (1.018), etc., así como a personas sin nacionalidad definida.

3/ La moción para la protección de la legalidad es un recurso extraordinario aplicable contra un juicio jurídicamente efectivo durante un período de tiempo dictado por la ley (normalmente seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de una sentencia o decisión) solamente si se ha infringido una ley. Este recurso extraordinario es inaplicable si se han determinado de modo erróneo o incompleto los hechos de una situación o si se han comprobado violaciones importantes de las disposiciones sobre procedimiento.